

Por Natán Olivos N.

En una reciente entrevista con Diario La Tercera el 22 de abril de 2024, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó la necesidad de centrar los esfuerzos de seguridad en la Región Metropolitana (RM), destacando que esta alberga al 40% de la población chilena. Este enfoque se intensificó tras una ola de homicidios en la capital, donde 17 personas perdieron la vida, llevando a la ministra a anunciar la expansión del Plan Calles Sin Violencia a toda la RM. Según Tohá, aproximadamente el 50% de los delitos del país se cometen en esta región.

La elección de focalizarse en la RM puede parecer lógica dada su alta densidad poblacional, pero es crucial interpretar las cifras de manera adecuada para evitar decisiones que no reflejen las verdaderas necesidades de seguridad del país. La pandemia de Covid-19 nos enseñó la importancia de diferenciar entre la frecuencia y la tasa de incidencia para una correcta evaluación de los datos. Por ejemplo, si comparamos dos ciudades con diferentes tamaños de población, una con 10,000 habitantes y 1,000 casos de Covid-19 en un mes, y otra con 100,000 habitantes y 5,000 casos, aunque la segunda ciudad tiene más casos absolutos, la tasa de incidencia es mayor en la primera (10% vs. 5%).

#### ANÁLISIS DE HOMICIDIOS EN CHILE

Un análisis más detallado de las estadísticas revela una realidad distinta a la percibida al observar únicamente los números absolutos. Según el "Informe

# Seguridad Ciudadana en Chile: ¿Prioridades Basadas en Datos y Evidencia o Estrategia Electoral?



**La concentración de recursos en la Región Metropolitana por parte del Ministerio del Interior plantea dudas sobre si las políticas de seguridad reflejan las necesidades reales del país o buscan beneficios electorales.**



Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2023" de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Región de Tarapacá registró 43 homicidios en 2023, mientras que la RM tuvo 557. Sin embargo, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 10.7 en Tarapacá, significativamente superior a la tasa de 6.7 en la RM. Otras regiones del norte, como Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama, también presentaron tasas altas de homicidios: 12.3, 8.3 y

7.8, respectivamente. Este análisis evidencia que las regiones del norte de Chile enfrentan una crisis de seguridad más severa que la RM cuando se considera la tasa de homicidios. No obstante, la respuesta del Estado ha sido desproporcionada, centralizando recursos en la capital.

#### CONSECUENCIAS DE UNA POLÍTICA CENTRALIZADA

La interpretación errónea o interesada de las estadísticas puede llevar a

decisiones que no reflejen las verdaderas prioridades de seguridad. La tendencia a concentrar los esfuerzos en áreas con mayor población puede estar influenciada por la búsqueda de réditos electorales, en lugar de una evaluación objetiva de las necesidades de seguridad.

La falta de atención a las regiones del norte del país, como Tarapacá, que tienen tasas de homicidios significativamente más altas, muestra una desconexión entre las

políticas de seguridad y las realidades locales. Esta centralización de recursos no solo es ineficaz sino que también exacerbó la crisis de seguridad en las regiones más afectadas.

#### LLAMADO A LA ACCIÓN

La percepción de abandono por parte del Estado es compartida por muchos ciudadanos en el norte de Chile. La inacción del Delegado Presidencial y la falta de respuestas efectivas del

Gobernador Regional son vistas como un fracaso en la defensa de las necesidades locales.

Es imperativo que las políticas de seguridad se basen en datos y evidencia, y no en estrategias electorales. La seguridad ciudadana debe ser una prioridad nacional, atendiendo las necesidades reales de todas las regiones del país. Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva y equitativa a la crisis de seguridad que enfrenta Chile.

En conclusión, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal y otros actores sociales llaman a una reevaluación de las estrategias de seguridad, instando al gobierno a considerar la evidencia estadística de manera integral y justa, para proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su región.

